

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE	ALEJANDRA LUCÍA DÍAZ GARCÍA
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES
PROCEDENCIA	JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-015-2023-00181-01
PRIMERA INSTANCIA	IMPUGNACIÓN TUTELA-ACCIONANTE
DECISIÓN	DECLARA NULIDAD POR FALTA DE INTEGRACIÓN

AUTO INTERLOCUTORIO No.0242

Medellín, veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023).

En esta oportunidad, sería del caso entrar a decidir la impugnación formulada frente al fallo de primera instancia proferido el 19 de mayo de 2023 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, dentro de la acción de tutela promovida por la señora **ALEJANDRA LUCÍA DÍAZ GARCÍA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, sino fuera porque se observa que la actuación se encuentra viciada de nulidad, como se precisará a continuación.

El accionante eleva la queja constitucional, solicitando se ampare su derecho fundamental de petición, aduciendo que la entidad hoy accionada no ha dado respuesta de fondo a la petición incoada el 09 de diciembre de 2022, tendiente a que se realice la validación de los aportes que manifiesta fueron trasladados desde el RAIS al RPMPD, procediendo a su vez con la actualización de su historia laboral.

En ese sentido, revisado el escrito de impugnación presentado por la señora **ALEJANDRA LUCÍA DÍAZ GARCÍA** y el material probatorio arrimado, se vislumbra que, dentro de las actuaciones administrativas para recolectar la información de la historia laboral de la demandante, tiene injerencia **PROTECCIÓN S.A.**, entidad a las que estuvo afiliada la accionante antes de la declaratoria de ineficacia del traslado decretada en sede ordinaria, (f. 18 a 26 Archivo 04 ED).

En hilo con lo antelado, para esta Corporación, es imperioso precisar que no obstante la sumariedad del trámite de la acción de tutela, su desarrollo no escapa a las garantías constitucionales de todo proceso judicial, ya que si el mismo, se ha surtido sin el conocimiento de cualquiera de las partes o de terceros con interés en la decisión que tome el Juez de tutela, dicha circunstancia comporta una violación a los derechos de contradicción y defensa y, por tanto, al debido proceso.

Necesariamente, el inciso 2 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, establece que: “*Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como*

coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”.

Así mismo, el artículo 16 del precitado Decreto ordena que todas las providencias que se profieran en desarrollo de la acción de tutela a quienes deben intervenir, no se deben limitar únicamente a los accionados, sino a todo aquel que pueda resultar afectado con la decisión que se tome dentro de la orden de amparo.

A su turno la Corte Constitucional en Sentencia ha señalado que:

“(…) el juez constitucional, como director del proceso, está obligado a -entre otras cargas- integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico”. En cuanto a la integración del contradictorio en sede de tutela, la jurisprudencia constitucional señala que es un deber del juez de primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los interesados, es decir, a todas las personas “que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jurídico (…)”.

En auto A553-2021 señala el alto tribunal que:

“(…) 14. El juez de tutela de primera instancia tiene la obligación de integrar debidamente el contradictorio, es decir, notificar y vincular a las partes y a los terceros con interés legítimo en el resultado del proceso^[22]. La Corte Constitucional ha señalado que no es posible dictar fallos inhibitorios en el trámite de tutela. Por lo tanto, aun cuando la parte accionante debe identificar a los responsables de las vulneraciones que invoca, el juez tiene el deber oficioso^[23] de integrar el contradictorio siempre que se percate que existe otro sujeto que, por su actividad, funciones o actos, ha debido ser vinculado^[24]. Sin embargo, “debe constar de manera expresa o desprenderse del expediente la existencia del tercero o terceros interesados”^[25]. De lo contrario, no se le puede exigir al juez de tutela el cumplimiento de obligaciones como la notificación de terceros cuyo interés en el proceso no es deducible de los documentos que conforman el expediente. Dicha carga sería desproporcionada e irrazonable^[26].

Sobre la oportunidad de la integración del contradictorio continuó precisando:

15. La indebida integración del contradictorio no implica, per se, la invalidación del trámite y tampoco obliga al juez de segunda instancia o a la Corte Constitucional a retrotraer las actuaciones en todos los casos. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, existen dos alternativas cuando se constata la indebida integración del contradictorio. Primero, la declaratoria de nulidad de todo lo actuado y la consecuente devolución del proceso al juez de primera instancia, para que se corrijan los errores procesales y se inicie nuevamente la actuación “con la concurrencia de la parte que no fue vinculada”^[27]. Segundo, la integración el contradictorio por medio de la vinculación del tercero con interés. El juez de segunda instancia y la Corte Constitucional en sede de revisión sólo pueden optar por la vinculación, sin necesidad de decretar la nulidad, cuando: (i) a pesar de la indebida integración del contradictorio existe una necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar^[28], o (ii) las circunstancias que dan lugar a la vinculación son posteriores a las decisiones de instancia y, por tanto, no era posible exigirle al juez de primera instancia notificar a terceros cuyo interés no era deducible del expediente^[29]. En este evento, la vinculación es

procedente pues no supone una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del tercero vinculado.

Por lo expuesto y dado que al trámite de la acción de tutela no se vinculó a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, y quien podría resultar responsable de lo deprecado en la presente Acción Constitucional, considera necesario la Sala ordenar su concurrencia al trámite.

Así las cosas, se considera que se incurrió en la causal 8ª de nulidad contemplada en el artículo 133 del Código General del Proceso, que indica:

“... cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”.

La nulidad que se decreta afecta el trámite surtido a partir de la Sentencia No.089 del 19 de mayo de 2023, por lo que deberá el Juzgado rehacer la actuación anulada, integrando y notificando en debida forma el contradictorio, y sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas.

Por lo expuesto, la **SALA TERCERA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir de la Sentencia No.089 del 19 de mayo de 2023, proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva.


SEGUNDO: En consecuencia, ordenar al Juzgado de conocimiento integrar al contradictorio a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**, conforme lo dispuesto en el presente proveído, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas.


TERCERO: Remítase por Secretaría el expediente digital al Juzgado de origen para lo pertinente.

CUARTO: De lo aquí resuelto notifíquese por el medio más eficaz a las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA